JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: JI-316/2018

PROMOVENTE: VICTOR HUGO GOVEA JIMENEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN.

MAGISTRADO PONENTE: DR. GASTÓN JULIÁN ENRÍQUEZ FUENTES.

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL GARZA MORENO.

Monterrey, Nuevo León, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que **confirma** la resolución por la que la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se declara incompetente para conocer de presuntas violaciones por el uso indebido del escudo nacional.

GLOSARIO

Comisión Estatal	Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Comisión de Quejas y Denuncias	Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Dirección Jurídica	Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Ley Electoral Local	Ley Electoral para el Estado de Nuevo León
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Sala Monterrey	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal

Las fechas que se mencionan corresponden al año dos mil dieciocho, salvo precisión en contrario.

R E S U L T A N D O:

1. ANTECEDENTES DEL CASO.

- 1.1. Denuncia.** El ocho de junio, el ahora actor presentó escrito de denuncia en perjuicio del C. César Garza Villarreal, por la supuesta indebida utilización del escudo nacional; impetrando la aplicación de una medida cautelar. Dicho curso se radicó por la Dirección Jurídica con la clave de expediente PES-328/2018.
- 1.2. Primer Desechamiento por incompetencia.** El día trece de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias, a propuesta de la Dirección Jurídica, emitió acuerdo mediante el que desechó la denuncia interpuesta por el ahora accionante, al considerar que carece de competencia para conocer respecto de los hechos motivo de la misma.
- 1.3. Interposición del Primer Juicio de Inconformidad y remisión a este Tribunal.** Al no estar conforme con la anterior resolución, en fecha quince de junio, el promovente presenta libelo inicial de demanda ante la Comisión Estatal, promoviendo Juicio de Inconformidad en contra de la referida determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias; dicha promoción fue remitida a este órgano colegiado de justicia comicial el dieciséis siguiente, sustanciándose el procedimiento bajo el número de expediente JI-130/2018 y dictándose el fallo respectivo el día cinco de julio, fecha en la que el Pleno de este colegiado emitió sentencia mediante la que revocó el acuerdo impugnado, al considerar que el mismo había sido emitido por autoridad incompetente.
- 1.4. Acuerdo de improcedencia.** En fecha diez de julio, el Director Jurídico, emite nuevo acuerdo de desechamiento, al considerar que, de los hechos denunciados, no se configura alguna infracción a la normatividad electoral.
- 1.5. Interposición del Segundo Juicio de Inconformidad.** Al no estar de acuerdo con el sentido de la determinación señalada en el punto que antecede, el justiciable interpuso nuevo juicio de inconformidad, mismo que se radicó en este Tribunal bajo el número de expediente JI-299/2018. Dicho medio de defensa fue resuelto por este colegiado en fecha trece de agosto, revocando el acuerdo impugnado y ordenando a la Comisión de Quejas y Denuncias a fin de que, en plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho corresponda conforme a sus atribuciones.
- 1.6. Segundo Desechamiento por incompetencia.** El día catorce de agosto la Comisión de Quejas y Denuncias, emitió acuerdo mediante el cual resuelve declarar la improcedencia de la denuncia interpuesta por el hoy inconforme, y por ende desecha la misma al considerar que los

hechos denunciados no configuran la probable actualización de una infracción a la ley de la materia que justifique el inicio de un procedimiento especial sancionador. Es precisamente dicha determinación la que constituye el acto de autoridad controvertido en el presente procedimiento jurisdiccional.

1.7. Interposición de Juicio para la Protección a los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Al considerar ilegal la resolución referida en el punto anterior, el impetrante interpuso, vía *per saltum*, juicio ciudadano ante la Sala Monterrey, esto el día veintiuno de agosto, siendo radicado bajo el número **SM-JDC-768/2018**.

1.8. Remisión del medio impugnativo. Admisión y emplazamiento. Al considerar improcedente el *per saltum* pretendido por el accionante, la Sala Monterrey, reencauzó el medio de impugnación, mismo que se admitió a trámite como Juicio de inconformidad, en fecha nueve de septiembre, registrando el expediente con la clave JI-316/2018, y ordenado el emplazamiento a los terceros interesados y a la autoridad señalada como demandada, fijándose asimismo día y hora para la celebración de las pruebas y alegatos correspondientes.

1.9. Audiencia de ley. El diecinueve de septiembre, tuvo verificativo la audiencia de calificación, admisión y recepción de pruebas y alegatos, poniéndose el asunto en estado de sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

2. COMPETENCIA

De acuerdo a lo establecido en los artículos 116 párrafo segundo, fracción IV, inciso I) de la Constitución Federal; 44 y 45 primer párrafo, de la Constitución Local; y, 1 fracciones II y IV, 85 fracciones II y IV, 276, 286 fracción II, inciso b) numeral 1 y 291 de la Ley Electoral local, este Tribunal es competente para conocer y resolver este juicio, porque se impugna un acto emitido por autoridad administrativa electoral de la entidad.

3. PROCEDENCIA

En el presente juicio se cumplen con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley Electoral local, relativos a la forma, oportunidad, legitimación, interés jurídico y definitividad. En consecuencia, toda vez que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice causa de improcedencia alguna, se procede a efectuar el estudio y resolución correspondiente.

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO. PRETENSIÓN Y CAUSA DE PEDIR

El promovente pretende se revoque la resolución impugnada, ya que considera le causa agravio que la responsable determine la causal de improcedencia contenida en el artículo 366, fracción IV, de la Ley Electoral local, al considerar que, contrario a lo aseverado por la Comisión de Quejas y Denuncias, es más que evidente que de los hechos narrados en denuncia y de las pruebas aportadas dentro de la misma, se desprenden, dice, conductas que vulneran la equidad en la contienda electoral.

Asegura el impetrante que, la autoridad administrativa electoral inadvierte el punto medular y que, conforme al artículo 370, fracción II, de la Ley Electoral, le otorga la competencia para conocer de los hechos denunciados, considerando que está más que demostrado el uso de los símbolos patrios, como lo es la Bandera Nacional en la indumentaria del denunciado, esto al momento de realizar propaganda y al realizar actos proselitistas dentro de la etapa de campaña electoral que se verificó para la elección de la Alcaldía de Apodaca, Nuevo León en el año que transcurre.

Manifiesta el justiciable que, el uso de los símbolos patrios tanto en la imagen como en su indumentaria del ciudadano César Garza Villarreal en calidad de candidato vulnera el principio de equidad en la contienda electoral, ya que, mediante dicha actividad influenciaba al electorado como una persona con mayor aptitud que los demás contendientes, puesto que, en su opinión, de ningún modo podemos olvidar que los símbolos patrios arraigan entre los mexicanos el sentimiento de pertenencia de una nación y nos da una identidad entre connacionales inclusive fuera de nuestro País, por lo que concluye que, la autoridad responsable, conforme al artículo 3 de la Ley Electoral local, debió de determinar inclusive en apariencia del buen derecho, que efectivamente los actos denunciados, probablemente rompen con la equidad en la contienda, pues si la regla general establece la prohibición expresa y absoluta de utilizar los símbolos patrios para promover la imagen de cualquier persona física o institución, cuanto y más se encontraría prohibida para un ciudadano que se encuentra conteniendo a un cargo de elección popular.

Por tanto, asegura el inconforme, el determinar que un candidato no infringe la ley por el uso de la Bandera Nacional en actos de proselitismo en campaña electoral, igual de válido sería determinar que los símbolos patrios no representan el sentimiento de pertenencia ni el del amor por la Nación o el lugar de residencia.

4.1. Consideración Previa.

Ahora bien, previo a realizar el análisis relativo a los motivos de disenso

formulados por el impetrante, conviene establecer que, la Sala Superior, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-287/2010, consideró que el examen sobre la competencia de la autoridad es un tema prioritario, cuyo estudio es de oficio, porque se trata de una cuestión preferente y de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el referido Máximo Tribunal Electoral de la Nación cita, como criterio orientador, la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 218/2007, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 170827, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, diciembre de dos mil siete, página ciento cincuenta y cuatro, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente¹:

COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.

Asimismo, se debe considerar que la garantía de seguridad jurídica es la certeza que tienen los ciudadanos de que su situación sólo será afectada a través de los procedimientos y formalidades establecidos previamente por las leyes.

En efecto, como lo ha sostenido la referida Sala Superior, los procedimientos, reglas y formalidades a que debe sujetarse todo acto de autoridad para producir válidamente la afectación en la esfera de derechos del gobernado, conforman de manera integral la garantía de seguridad jurídica; de modo que, cuando un acto de esa naturaleza menoscabe el ámbito jurídico de un individuo, sin observar aquellas exigencias de carácter instrumental establecidas previamente por la ley, se trastoca el citado mandamiento constitucional.

---

¹ Lo anterior también se contiene en la ejecutoria relativa al expediente SUP-JRC-287/2010.

Lo anterior sin olvidar que el principio de legalidad se traduce en que las autoridades únicamente pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos previstos, esto es, sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza expresamente².

Establecido lo que antecede, conviene ahora, traer a la vista lo establecido por la Sala Monterrey en la ejecutoria dictada dentro del expediente SM-JDC-626/2018 y su acumulado SM-JRC-159/2018:

5.2. La Comisión de Quejas es el órgano competente para desechar una denuncia dentro de un procedimiento especial sancionador.

El artículo 370, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local prevé lo relativo al desechamiento de una denuncia dentro de un procedimiento especial sancionador, en los términos siguientes:

Artículo 370 ...
[...]

La Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará a Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento.

Como se aprecia, el precepto dispone lo siguiente:

- a) La Dirección Jurídica es, en principio, la facultada para admitir o desechar una denuncia, lo cual debe realizar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción.
- b) Sin embargo, el propio artículo precisa que, en caso de desechamiento, la decisión de la Dirección Jurídica debe ser "confirmada por escrito", sin mencionar qué órgano debe confirmar la improcedencia.
- c) La Dirección Jurídica debe notificar el desechamiento al denunciante, dentro del plazo de doce horas.
- d) Por último, la decisión final -esto es, confirmada- se debe informar al Tribunal Estatal Electoral, para su conocimiento.

Hasta aquí, se advierte que, de la lectura funcional de la disposición en cita y contrario a lo que sostuvo el tribunal responsable, la Dirección Jurídica no está facultada, por sí sola, para desechar la denuncia de un procedimiento especial sancionador, pues su determinación debe necesariamente ser confirmada por escrito por otro órgano.

(...)

Como puede observarse, el Reglamento de Quejas desarrolló a mayor detalle el procedimiento previsto en el artículo 370, párrafo segundo, de la Ley Electoral Local, fijando las reglas siguientes:

- a) La Dirección Jurídica no decide en definitiva la improcedencia de la denuncia, sino que, al advertirlo, elabora un proyecto de desechamiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga a su alcance los elementos necesarios.

---

² Los argumentos establecidos en este y los dos párrafos anteriores fueron emitidos por la Sala Superior al resolver los juicios identificados con las claves SUP-JDC-1200/2015 Y SUP-JDC-1201/2015, ACUMULADOS.

b) La Comisión de Quejas es la facultada para confirmar o no ese proyecto, en términos de lo previsto en el artículo 370 de la Ley Electoral Local, lo cual debe realizar dentro de los cinco días posteriores a la recepción de esa propuesta.

c) La Dirección Jurídica notificará al denunciante la decisión final que tome la Comisión de Quejas, dentro de las doce horas siguientes a su emisión.

Así las cosas, le asiste la razón al denunciante -ahora actor- cuando sostiene que la Comisión de Quejas era la competente para desechar la denuncia recibida y no la Dirección Jurídica, como incorrectamente lo consideró el tribunal responsable.

Como se concluye de lo trasunto, la autoridad judicial electoral de la federación determinó que, la Dirección Jurídica, es solo autoridad competente para elaborar, en su caso, el proyecto para desechar las denuncias que se presenten con la intención de que se sustancie un procedimiento especial sancionador, pero esa propuesta debe ser irremediamente aprobada o rechazada por la autoridad facultada para ese efecto, es decir, la Comisión de Quejas y Denuncias.

Ahora bien, al atender a cabalidad el criterio trasunto, mismo que este colegiado hace suyo, es por lo que se tiene que, una vez establecido que el acto impugnado efectivamente fue emitido por el órgano autorizado legalmente para el efecto, lo procedente es dilucidar si dicha determinación administrativa resulta apegada a derecho o bien, como lo sostiene el impugnante, la misma resulta contraria a derecho.

5. Estudio y resolución de la controversia planteada.

Como ha quedado establecido, la denuncia desecheda por la Comisión de Quejas y Denuncias, versa sobre la imputación que el quejoso realiza al incoado respecto de la utilización del símbolo patrio sin la autorización correspondiente, trayendo, bajo su óptica, en el electorado, una asociación entre éste y su candidatura, por lo que, considera, es evidente que deben de tomarse las medidas cautelares para impedir que el denunciado siguiera utilizando los símbolos patrios para promover su imagen, ya que, la asociación que tienen los símbolos patrios podría ocasionar en el electorado una falsa realidad entre el otrora candidato y la figura de autoridad, trayendo consigo una inequidad en la contienda electoral, ello con base en las consideraciones del justiciable que ya fueron sintetizadas en el apartado 4 de este fallo.

Ahora bien, una vez establecida la litis, resulta conveniente traer a la vista lo siguiente:

ARTÍCULO 55.- Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.

Artículo reformado DOF 09-05-1995

ARTÍCULO 56.- Constituyen infracción a esta Ley las conductas siguientes:

I. Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en el artículo 3o. de esta Ley;

II. Utilizar el Escudo Nacional sin la autorización a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley;

III. Inscribir en la Bandera Nacional la denominación o razón social de las Instituciones sin la autorización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley;

IV. Comercializar ejemplares de la Bandera Nacional que contengan cualquier tipo de inscripciones, incluyendo las previstas por el artículo 7o. de esta Ley;

V. Omitir rendir honores a la Bandera Nacional en términos del artículo 11 de esta Ley;

VI. Inscribir en la Bandera Nacional el nombre de personas físicas o Instituciones para promover su imagen, bienes o servicios en contravención de lo señalado en el artículo 32 Bis de esta Ley;

VII. Portar la banda presidencial;

VIII. Alterar la letra o música del Himno Nacional que establecen los artículos 57 y 58 de esta Ley, y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos, en contravención de lo previsto en el artículo 39 del presente ordenamiento;

IX. Cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro, en contravención de lo previsto en el artículo 39 de esta Ley;

X. Cantar o ejecutar los himnos de otras naciones, sin la autorización a que se refiere el segundo párrafo del artículo 39 de esta Ley, y

XI. Omitir la transmisión del Himno Nacional en los tiempos del Estado, en términos del artículo 41 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo reformado DOF 11-05-2018

ARTÍCULO 56 Bis.- El procedimiento para imponer las sanciones a las infracciones a que se refiere el artículo anterior, se tramitará en términos del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo adicionado DOF 11-05-2018

ARTÍCULO 56 Ter.- Las infracciones a la presente Ley serán impuestas y sancionadas por la Secretaría de Gobernación considerando los criterios siguientes:

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;

II. Los daños o perjuicios ocasionados a los Símbolos Patrios por la conducta constitutiva de la infracción, que denigren sus características, uso y difusión;

III. La intención de la acción u omisión constitutiva de la infracción, que denigre sus características, uso y difusión;

IV. La capacidad económica y grado de instrucción del infractor, y

V. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción.

Se consideran graves las infracciones a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII y IX del artículo 56 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 11-05-2018

ARTÍCULO 56 Quáter.- Las sanciones señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de quienes incurran en ellas.

Artículo adicionado DOF 11-05-2018

ARTÍCULO 56 Quintus.- A los infractores de la presente Ley, se les podrá imponer una o varias de las sanciones siguientes:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa de hasta diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción;

III. Multa adicional a la prevista en la fracción anterior de hasta diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por cada día que persista la infracción;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas, y

V. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo adicionado DOF 11-05-2018

De lo trasunto se concluye que el uso de los símbolos patrios (emblema del escudo y la bandera nacionales) está regulado por una legislación distinta de la comicial, precisamente la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que, en los numerales arriba transcritos, establece como exclusiva competencia para conocer de los procedimientos relativos a una mala utilización de los mismos, así como la aplicación de las sanciones respectivas, a la Secretaría de Gobernación, entidad pública que tiene la jurisdicción para aplicar la sanción correspondiente a partir del catálogo establecido en la propia ley en mención.

Luego, si por disposición legal, el conocimiento de las posibles infracciones que se denuncien por una supuesta mala utilización de cualquiera, de todos o de algunos de los símbolos patrios, corresponde a la referida autoridad federal, entonces, es inconcuso que dicha competencia no la puede asumir la demandada, de lo que resulta ajustada a derecho su determinación, que es materia de impugnación en el presente juicio, lo anterior ya que este resolutor considera que los actos denunciados y tildados de ilegales por parte del recurrente en modo alguno implican una violación a la normatividad electoral, por lo que su investigación y posible sanción escapan de la competencia de la autoridad administrativa electoral de la entidad.

Al respecto, se trae a la vista el criterio sostenido por la Sala Superior, al conocer de un asunto que guarda similitud con el que ahora se resuelve:

En ese sentido, **si la propaganda cuestionada contiene o no el escudo nacional**, o el escudo oficial de la Cámara de Senadores, **no incide respecto**

de la naturaleza de los actos materia de la denuncia, pues lo que se sanciona al considerar que determinadas conductas constituyan actos anticipados de campaña o precampaña, **es la ventaja o posicionamiento indebido que pueda obtener quien los realiza, en el proceso electoral, frente a sus competidores, afectando el principio de equidad electoral.**

Así, el hecho de que la propaganda en cuestión contenga el escudo nacional o el escudo oficial del Senado de la República **no implica que con la misma el denunciado obtenga o haya obtenido un posicionamiento indebido frente a sus contendientes electorales, pues ésta dependerá del contenido en sí mismo de los mensajes y no de la presencia del escudo nacional.**

No se soslaya que la utilización del escudo nacional puede constituir un ilícito; sin embargo, por una parte, debe ponderarse que al momento en que se verificaron los hechos denunciados, Francisco Domínguez Servién tenía el carácter de Senador de la República, por lo que resultaría válida la utilización de dicho símbolo en la propaganda institucional y, por otro, que **aún en el supuesto de que fuera indebida la utilización del mismo, la autoridad electoral no es la competente para conocer de ese tipo de ilícitos, por lo que en cualquier caso, el denunciante estaría en posibilidad de formular la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.**

* El énfasis es añadido.

Como es de verse, el criterio sostenido en la ejecutoria invocada, reitera lo aseverado por este Tribunal supra líneas, en cuanto a que, las infracciones, si las hubiere, en las conductas y hechos denunciados por el quejoso, escaparían al conocimiento, competencia y jurisdicción de la autoridad demandada, al resultar, además, ajenas a la materia electoral.

Por lo anterior es que resulta INFUNDADO el agravio esgrimido por el inconforme y se confirma el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias, motivo de controversia.

6. RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 313, 314 y 315 de la Ley Electoral local, se resuelve:

PRIMERO. Se CONFIRMA, en lo combatido, el acuerdo de desechamiento emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento del acuerdo plenario dictado dentro del expediente SM-JDC-768/2018, notifíquese a la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, dentro de un término de veinticuatro horas posteriores a la emisión de este fallo, remitiendo al efecto las constancias que así lo acrediten.

Notifíquese en términos de Ley.

Así definitivamente lo resolvió el Pleno del H. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por **POR MAYORÍA** de votos de los ciudadanos Magistrados, **GASTÓN JULIÁN ENRÍQUEZ FUENTES y JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA**, y formulando voto particular en contra el Magistrado **CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA**, en sesión pública celebrada el día veinte de septiembre de dos mil dieciocho, habiendo sido ponente el primero de los nombrados Magistrados, ante la presencia del ciudadano licenciado **RAFAEL ORDÓÑEZ VERA**, Secretario General de Acuerdos de este tribunal.- **Doy Fe.-**

RÚBRICA
DR. GASTÓN JULIÁN ENRÍQUEZ FUENTES
MAGISTRADO PRESIDENTE

RÚBRICA
LIC. CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA
MAGISTRADO

RÚBRICA
MTRO. JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. RAFAEL ORDÓÑEZ VERA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

VOTO PARTICULAR EN CONTRA, QUE FORMULA EL MAGISTRADO CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD CON CLAVE JI-316/2018.

En términos de lo dispuesto en la fracción “II” del artículo 316 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, expongo mi voto particular en contra, pues considero que indebidamente se entró al estudio de fondo, siendo lo conducente sobreseer el procedimiento en que se actúa.

En efecto, es un hecho notorio que, mediante la resolución de fecha veintitrés de julio, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, revocó la determinación dictada por este Tribunal Electoral dentro del Juicio de Inconformidad con clave JI-130/2018, que fuera la que motivó el acuerdo que dio origen a la secuela procesal que ahora nos ocupa.

Así las cosas, es palmario que la resolución que dictó la Sala Regional, dejó sin efectos todos los acuerdos que derivaron de la sentencia primigenia, razón por la cual, incluso el cumplimiento ordenado en el diverso JI-299/2018 carecía de materia.

Por lo tanto, lo conducente era dictar el sobreseimiento, toda vez que en la especie, el acuerdo de desechamiento que rige es el que se dictó el once de junio y no el del catorce de agosto. Lo anterior, en términos de lo ordenado en la jurisprudencia obligatoria intitulada “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.”, que se transcribe a continuación:

“Época: Novena Época
Registro: 192902
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
Tomo X, Noviembre de 1999
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 122/99

Página: 28

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.

Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.

Amparo en revisión 2695/96. Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, S.A. de C.V. y coags. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo en revisión 2548/97. Alsavisión, S.A. de C.V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

Amparo en revisión 211/97. Recicladora Mexicana de Vías Terrestres, S.A. de C.V. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.

Amparo en revisión 2910/97. Grant Prideco, S.A. de C.V. 26 de abril de 1999. Mayoría de diez votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo en revisión 1424/98. Cinram Latinoamericana, S.A. de C.V. 26 de abril de 1999. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 122/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve."

En razón de lo anterior y en términos de lo ordenado en el artículo 318, fracción "III", de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, reitero mi voto en contra.

--La resolución que antecede se publicó en la lista de acuerdos de este Tribunal el veinte de septiembre de dos mil dieciocho. **-conste. -RÚBRICA**